

DISPOSITIVOS DE NORMALIZACIÓN EN LAS INESTABLES HEGEMONÍAS PROVINCIALES DE LA ARGENTINA EN LOS AÑOS NOVENTA

ESPACIO ABIERTO

MARCELO ALEJANDRO GRACIOSI BARRIOS - marcgraciosi@hotmail.com
Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, Argentina

ARK CAICYT: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s16668979/3kxjy68bp>

DOI: <https://doi.org/10.62174/arg.2024.9957>

FECHA DE RECEPCIÓN: 11-9-2023

FECHA DE ACEPTACIÓN: 15-3-2024

Resumen

El avance de la hegemonía del capital financiero desde los años 1970, derivó en los años noventa en la Argentina en una profunda crisis que se cristalizó en un alza de las luchas sociales en provincias golpeadas por la desocupación y con dificultades para pagar salarios. Esas luchas contrahegemónicas cuestionaron los modos diversos en que la hegemonía neoliberal se ejecutaba en distintas provincias. En respuesta a dichas luchas contrahegemónicas se desplegaron dispositivos de normalización que intentaron restaurar el orden político.

El objetivo del presente artículo es indagar dichos dispositivos de normalización, observar cómo operaron en estos territorios signados por protestas ligadas al agravamiento de las condiciones de vida de asalariados estatales, docentes, fracciones de clase obrera, cuentapropistas y desocupados. La hipótesis que planteamos es que la normalización se despliega en épocas de mayor enfrentamiento social. Por otra parte, dichos dispositivos se modifican e incluso emergen nuevos tipos en respuesta a las diversas formas de resistencia sobre las que intervienen.

Palabras clave: hegemonía, crisis, protestas, normalización

NORMALIZATION MECHANISMS IN THE UNSTABLE PROVINCIAL HEGEMONIES OF ARGENTINA IN THE NINETIES

Abstract

The advance of the hegemony of financial capital since the 1970s led to a deep crisis in Argentina in the 1990s, which crystallized in the rise of social struggles in provinces hit by unemployment and difficulties in paying salaries. These counter-hegemonic struggles questioned the diverse ways in

which neoliberal hegemony was executed in different provinces. In response to these counter-hegemonic measures, normalization devices were deployed in an attempt to restore political order. The purpose of this article is to investigate these normalization devices, to observe how they operated in these territories marked by protests linked to the worsening of the living conditions of state employees, teachers, fractions of the working class, self-employed and unemployed. The hypothesis we put forward is that normalization is deployed in times of greater social confrontation. On the other hand, these devices are modified and even new types emerge in response to the various forms of resistance on which they intervene.

Key words: Hegemony, crisis, protests, normalization

1. Introducción

El avance de los intereses del capital financiero en la década de los setenta y su profundización en los noventa derivó en una profunda crisis social (Basualdo, 2006; Bonnet 2002; Castellani y Schorr, 2004; Iñigo Carrera 2002; Schorr, 2001) que se cristalizó en un alza de luchas sociales. Sobre todo, en provincias que tenían una creciente masa de población desocupada y subocupada y dificultades para pagar salarios a los trabajadores estatales dado el enorme ajuste fiscal que imponía el modelo económico nacional¹. En esta coyuntura gobiernos provinciales que presentaban un carácter hegemónico buscaron conservar su dominio a partir de diferentes dispositivos de poder.

En este contexto el objetivo del presente artículo consiste en: a) indagar la emergencia de protestas sociales en los años noventa en la Argentina y como las mismas incidieron en gobiernos provinciales que presentaban un carácter hegemónico (tomamos los casos de Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Corrientes y Chaco) b) Observar posibles continuidades entre estas protestas y otros procesos de lucha histórica c) Analizar cuáles fueron los dispositivos de normalización que se desplegaron como formas de control sobre la protesta².

¹ El concepto de subocupación refiere al “conjunto de personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más horas.

² Las protestas referidas fueron protagonizadas por *fuerzas sociales* constituidas por diferentes alianzas de clases. No vamos a discurrir aquí en un análisis sobre las diferentes clases sociales concretas en la Argentina en el periodo consignado, nos limitamos a decir que se trataba en la

Específicamente las protestas que se registraron se corresponden con huelgas, cortes de ruta, manifestaciones callejeras y motines³.

El problema que nos planteamos es ¿qué conflictos y protestas irrumpieron en las provincias en “tiempos de crisis”? ¿Cómo afectó a la hegemonía política que tenían los diferentes gobiernos de dichas provincias? ¿Qué mecanismos de normalización operaron en tales escenarios para sostener las referidas hegemonías? ¿Qué resistencias sociales se ejercieron desde los sectores en lucha frente a estos mecanismos?

La hipótesis teórica que ponemos en discusión es que los dispositivos de normalización se intensifican en épocas de mayor enfrentamiento social. A la vez emergen nuevos y otros ya existentes se modifican para dar respuestas a las situaciones de protesta, a los efectos de sostener la hegemonía preexistente.

Cuando hablamos de normalización no nos referimos a la mera imposición de una norma legal o social (o a una acción represiva), sino a la construcción móvil de saberes, mediciones, estándares. Podríamos decir normaciones que permiten conocer, delimitar y establecer en qué medida cierta regulación de la población es funcional⁴.

603

mayoría de los casos de asalariados estatales, docentes, obreros ocupados y desocupados y sectores del comercio que pueden caracterizarse como una pequeña burguesía pobre (Iñigo Carrera, 2014).

³ Tomamos aquí la concepción de protesta utilizada por PIMSA (Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina). La categoría específica que toma este grupo es el de hecho de rebelión: “todo hecho colectivo de protesta o de lucha, llevado a cabo por personificaciones de categorías económicas, sociales o políticas, dirigido contra alguna expresión del estado de cosas existente” (Cotarelo, 2009). Desde este enfoque diferencian tipos de protestas sociales en la Argentina contemporánea: “La protesta social aparece, desde 1989, bajo distintas manifestaciones conocidas vulgarmente como saqueos, estallidos, “azos” y puebladas. En nuestra investigación hemos delimitado cinco tipos distintos de hechos: 1) los llamados “saqueos” de 1989/90, que hemos conceptualizado como revuelta; 2) el llamado “santiagazo” de 1993, que hemos conceptualizado como motín; 3) otros hechos en los que existen elementos de protesta que, provisoriamente, conceptualizamos como manifestación de protesta callejera (que incluyen por ejemplo, marchas, concentraciones, ollas populares, ocupaciones, “escraches”); 4) las huelgas, incluyendo las huelgas generales a nivel nacional y provincial; 5) los llamados cortes de ruta (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000, p.75).

⁴ El concepto de normalización alude a procesos de regulación de la vida de los individuos y de las poblaciones. Como lo expresa Foucault (2008) “La sociedad de normalización es una sociedad en la

Consideramos que algunas herramientas teóricas propuestas por Michel Foucault permiten problematizar la forma en que ciertos regímenes políticos (que caracterizamos como hegemónicos) respondieron frente a movilizaciones sociales que desestabilizaban.

Por una parte, utilizamos aquí el concepto de dispositivo; un conjunto heterogéneo de elementos discursivos y no discursivos que poseen en cada caso un tipo de vínculo en particular que les permite desplegar una fuerza en determinada dirección. Los dispositivos responden a una urgencia y suponen un ejercicio de poder que implica una estrategia dominante. Tal como lo expresa Foucault (1985): “Se trata de cierta manipulación de las relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para bloquearlas, o para estabilizarlas” (p.130). Nos planteamos aquí, entonces cuales son los dispositivos de poder que se utilizaron para estabilizar un régimen político hegemónico.

Foucault (2008) distingue, a su vez, dos modalidades de ejercicio del poder en la modernidad: la disciplina y la biopolítica, la primera apunta a construir un cuerpo individual dócil y productivo y la segunda se ejerce sobre las poblaciones. Mientras la sociedad disciplinaria supone aparatos de coerción que apuntan a la docilidad/utilidad del cuerpo de los individuos en espacios cerrados (como las cárceles o las fábricas); una sociedad de control supone toda una red de instituciones que operan desde la vigilancia y la corrección.

Lo que observamos en estos procesos históricos es el cruce entre la normalización de la tecnología de poder disciplinaria y la biopolítica; dado que intervenían mecanismos de adiestramiento de los cuerpos individuales y mecanismos de control sobre el comportamiento colectivo de la población.

que se cruzan, según una articulación ortogonal, la norma de la disciplina y la norma de la regulación” (p. 229).

Ahora bien, en los hechos de rebelión registrados también reconocemos ejercicio de poder soberano, particularmente acciones represivas y punitivas por parte de quienes detentaban el poder del estado.

Por otra parte, recurrimos aquí a la noción de hegemonía de Gramsci. El concepto de hegemonía es de un elevado nivel teórico, puesto que da cuenta de las formas que asume históricamente el dominio de una clase social. En este sentido aporta a la dilucidación de los mecanismos de la dominación de la burguesía al analizar cómo se constituye y sostiene un orden social asimétrico. Ahora bien, la categoría de hegemonía es compleja y se presenta de diversas formas en los escritos de Gramsci.

Como dijimos, dicha noción refiere al dominio de un grupo social (que expresa un interés de clase) sobre otros a partir de una articulación de formas de coacción y consenso. En ciertas lecturas de este concepto se marca la fuerza del consenso como forma de dominación “En una primera aproximación, el concepto de hegemonía en Gramsci se refiere a la estrategia desplegada por un determinado grupo social para generar la aceptación de sus propias posiciones ideológicas entre los otros grupos sociales por medio de la persuasión y el consenso” (Ruiz Sanjuán 2016, p. 2). La dinámica de la reflexión se corre desde el plano de la acción represiva del estado hacia la construcción de “mando”, de “guía” o de “direccionamiento” por parte de la burguesía en la vida de la sociedad civil (Anderson, 1981).

En *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno*, Gramsci señala cómo este concepto de hegemonía consiste en una constante combinación -y equilibrada- entre fuerza y persuasión:

El ejercicio normal de la hegemonía en el terreno devenido clásico del régimen parlamentario se caracteriza por la combinación de la fuerza y el consenso que se equilibran en formas variadas, sin que la fuerza rebase demasiado al consenso, o mejor tratando de obtener que la fuerza aparezca apoyada sobre el consenso de la mayoría que se expresa a través de los órganos de la opinión pública, los cuales, con este fin, son multiplicados artificialmente (Gramsci, 1980, p. 125).

En nuestro caso, no solo utilizamos dicha categoría en su carácter más amplio para referir a la hegemonía del capital financiero internacional, sino que también la

usamos para aludir a ciertos regímenes políticos que gobernaban provincias cuya formación económica y social era periférica⁵. Cabe destacar que hablar de hegemonía del capital financiero o hegemonía neoliberal genera menos controversias que hablar de hegemonía política; como la denominada “hegemonía menemista” (Bonnet, 2008), la “hegemonía neoconservadora” (Bonnet y Piva, 2013) o la hegemonía kirchnerista (Gamallo, 2014). En este artículo, tomamos esta perspectiva de caracterizar un período tomando como eje analítico la dimensión de la hegemonía política.

El planteo metodológico parte del análisis de dispositivos específicos de poder y no de un análisis global de la sociedad, puesto que no se trata de ir a la caza de un mecanismo general de dominación, ni de pensar la dominación de clase como algo invariable. Consideramos que no existe algo así como “el” poder que desciende y atraviesa a todo el cuerpo social de manera homogénea, sino que en ese despliegue hay rupturas, discontinuidades y relaciones históricas en los que las relaciones de fuerza operan de manera disimétrica sobre los cuerpos (Foucault, 2002, 2008 y 2010). Por lo tanto, lo que nos proponemos es observar y analizar los dispositivos de normalización en la historia efectiva.

Es así que en un abordaje arqueológico-genealógico analizaremos prácticas discursivas y extradiscursivas que señalan las continuidades menos visibles. En esta clave de lectura problematizamos una mirada lineal sobre la conflictividad social de los años noventa. Para ello analizamos una serie de documentos: textos de investigación, documentos oficiales, periódicos nacionales, periódicos provinciales, prensa de partidos de izquierda, documentales, programas de radio y TV a los

⁵ La relación centro-periferia fue tematizada por diferentes autores en la segunda mitad del siglo XX (el mismo Marx, al igual que otros clásicos como Lenin y Luxemburgo consideran que el orden capitalista tendencialmente subsume a las economías no capitalistas que constituyen en este sentido su periferia). Una de las interpretaciones más difundidas sobre la materia es la de Maurice Dobb, quien subrayaba la obstrucción a la industrialización de la periferia por parte del centro (Dobb, 1969). Paul Baran, sin embargo, advirtió la existencia de ciertos procesos de expansión fabril en la periferia (Baran, 1959). Por otra parte, en esta lógica centro periferia es frecuente que las grandes empresas contrarrestaban sus adversidades con mayores exacciones a la “periferia” (Sweezy, 1973a, 1973b.). Samir Amin agregaba que debemos tener en cuenta la existencia de formas internacionales diferenciadas de explotación y realzó los lucros obtenidos en la periferia como un mecanismo compensatorio de las mejoras concedidas a los trabajadores del centro (Amin, 1976).

efectos de reconocer pliegues ocultos, acontecimientos invisibilizados, particularmente deteniendo la reflexión sobre los dispositivos de normalización social que operaron ante el ascenso de luchas sociales.

En los casos de los análisis sobre la provincia de Chaco y Corrientes realizamos trabajo de campo y sumamos entrevistas a informantes claves que nos permite visualizar con mayor profundidad los mecanismos de normalización.

El artículo está compuesto de un primer apartado donde, como dijimos, rastreamos luchas sociales en la provincia de Neuquén a finales de los años sesenta y mediados de los ochenta. Un segundo apartado aborda lo que denominamos aquí como eslabones intermedios de protestas. El tercer apartado analiza las protestas sociales en Salta en 1997. Un cuarto apartado se retrotrae a lo que ciertos estudios consideran como el motín fundacional en Santiago del Estero en 1993. El quinto apartado presenta la estabilización del orden social en el año 1999 en la provincia del Chaco. El sexto apartado toma la protesta social correntina también en el año 1999.

607

2. Observar las continuidades menos visibles

Lo que vamos a abordar son los conflictos y las luchas sociales que desestabilizaron a diferentes regímenes políticos provinciales en la Argentina. Ahora bien, en este ejercicio de problematización resulta difícil distinguir el movimiento orgánico de la coyuntura (Gramsci, 1980). Si bien lo orgánico y lo coyuntural están íntimamente relacionados, el desafío es pensar mutaciones parciales y sus posibles conexiones con las variaciones estructurales de una formación social.

El error en el que se cae frecuentemente en el análisis histórico político es el no saber encontrar la relación justa entre lo orgánico y lo ocasional. Se llega así a exponer como inmediatamente activas causas que operan en cambio de manera mediata, o por el contrario a afirmar que las causas inmediatas son las únicas eficientes (Gramsci, 1980, p. 54).

De este modo intentamos evitar analizar las protestas a los años noventa solo como una emergencia frente a un paquete de medidas “neoliberal”⁶. En relación a ello, ciertos estudios plantean la existencia de un ciclo de protestas sociales en los noventa que tendría como punto de inflexión el Santiagueño en 1993 (Castillo, 2007; Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000)⁷. Al mismo tiempo una multiplicidad de investigaciones consideran que las protestas de los años noventa se ligan de manera directa al surgimiento del denominado movimiento piquetero con las luchas de Cutral-Có en la provincia de Neuquén en 1996 y 1997 y Tartagal y Mosconi en la provincia de Salta en 1997.⁸

Benclowicz (2011), por ejemplo, plantea que diversas investigaciones sitúan la emergencia del movimiento piquetero en las luchas de Tartagal y Mosconi: “distintos investigadores han planteado que la cuna del movimiento se ubica especialmente en los pueblos petroleros de Tartagal y General Mosconi, pertenecientes al departamento General San Martín de la provincia de Salta” (p.80). Los trabajos de Svampa y Pereyra (2003) y Auyero (2004) sustentan esta perspectiva⁹. Massetti (2004) por su parte, menciona dos momentos fundacionales del movimiento piquetero que constituyen el “momento mítico” de los cortes de ruta de 1996-1997 y el “momento organizativo” de la movilización en el conurbano bonaerense en el año 2001.

608

⁶ Junto a Murillo (2015) asumimos al neoliberalismo como un proceso social que va más allá de un paquete de políticas de ajuste económico y de la omnipresencia del mercado, pues implica un proyecto civilizatorio.

⁷ “El motín de 1993 señala, como dijimos, que ha comenzado una fase ascendente de las luchas de la clase obrera y el pueblo. A la vez, se observa que, a diferencia de las luchas producidas antes de diciembre de 1993, desde entonces los trabajadores logran, si no evitar la aplicación de políticas de gobierno que apuntan a eliminar conquistas históricas, al menos evitar que se apliquen de la manera y con la velocidad con que la oligarquía financiera pretende. También puede observarse que en el motín de 1993 y en algunos de los cortes, se pone en evidencia una ruptura en la relación pueblo-representantes” (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000, p.4).

⁸ Algunos de los estudios referenciales sobre el tema son: Svampa y Pereyra (2003); Schuster, F., Naishtat, F., Nardacchione, G. y Pereyra, S. (2005); Auyero (2004); Oviedo (2000).

⁹ El libro de Svampa y Pereyra *Entre la ruta y barrio* explica el comienzo del movimiento piquetero a partir de dos experiencias, la primera vinculada a las crisis por la disolución de las economías de enclave en las ciudades petroleras; la segunda, relacionada con la multiplicidad de organizaciones inscriptas en los entramados socio-territoriales de los barrios populares del Gran Buenos Aires.

Spaltemberg y Maceira (2001) abordan la constitución del movimiento de trabajadores desocupados en el marco de las transformaciones sociales que afectaron a la clase obrera. Observan que en la década de los noventa se produjo un cambio sectorial de los conflictos, cobraron mayor relevancia los conflictos de trabajadores estatales a la vez se desplazan los conflictos hacia el interior del país. Merklen (2005) puso de relieve otra vía de constitución del movimiento piquetero vinculada a la conformación de numerosos contingentes sociales en barrios periféricos que desde la década del setenta fue transitando nuevas experiencias territoriales. En coincidencia con Merklen, Delamata (2004) pone énfasis en esta trama de “desborde de los barrios” donde las organizaciones sociales que emergen se presentan como una alternativa a la hegemonía peronista en la asistencia a los pobres. El desarrollo del movimiento piquetero desde este enfoque fue una respuesta a las consecuencias del neoliberalismo que en la década del noventa. Desde el enfoque de Delamata (2004) el crecimiento del desempleo “no condujo a la inercia; muy al contrario, pasada la mitad de la década, los excluidos del mercado de trabajo comenzaron a ensayar nuevas formas de movilización” (p.82)

609

Otras investigaciones suponen una revisión crítica de aquellas que se fueron acumulando sobre este fenómeno que captó el interés social, político y académico. Quirós (2006) cuestionó las investigaciones que relevan la palabra de los dirigentes de las organizaciones de desocupados en detrimento de su base social. La perspectiva de Quirós toma distancia de trabajos como los de Vommaro (2004) y Bidaseca (2004) que tienden a una suerte de homogenización identitaria en el conjunto de los participantes de las organizaciones de desocupados.

El análisis de Ferraudi Curto (2007) observó que ciertos estudios sobre el movimiento piquetero parten de una visión negativa de los sujetos en tanto desocupados (como desintegrados sociales) y ven en el piquete una acción disruptiva que construye una subjetividad contrahegemónica.

Retamozo (2006) también revisa críticamente los escritos sobre el movimiento piquetero y cuestiona las explicaciones lineales donde los sujetos pasan de desocupados a la identidad política de piquetero sin problematizar formas

históricas de construcción de la subjetividad. Su lectura reflexiona sobre la mediación entre estructura y acción a partir de las transformaciones en la subjetividad. A la vez toma distancia de dos posiciones que pueden encontrarse en la literatura sobre el tema: “primero, que las movilizaciones de los desocupados argentinos son reacciones espasmódicas ante el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares; segundo, que la aparición de los desocupados movilizadas supone la emergencia de un sujeto necesariamente emancipatorio” (Retamozo, p.147).

El trabajo de Oviedo (2000) presenta una mirada de conjunto sobre las luchas de los años noventa en la Argentina. En esta senda vincula la emergencia del movimiento piquetero como una necesidad de la masa de trabajadores de luchar contra la desocupación. Oviedo (2000) menciona que las primeras organizaciones de desocupados nacen en la provincia de Neuquén y estuvieron conformadas por obreros de la construcción, mientras que en la provincia de Salta por obreros petroleros despedidos por la empresa YPF. Este autor resalta que “unos y otros tenían una importante experiencia de lucha sindical y antiburocrática” (p.7). A mediados de los ochenta los obreros de la construcción de Neuquén habían logrado desplazar a una conducción sindical burocrática y en Salta los obreros encabezaron la resistencia contra la privatización de YPF en 1991. En la lectura de Oviedo el movimiento piquetero renovó las tradiciones de lucha de la clase obrera argentina que tuvieron lugar desde principios del siglo XX.

610

Retomando en parte esta mirada de Oviedo intentaremos avanzar en el reconocimiento de *continuidades menos visibles* para evitar recortar el análisis de las protestas a las luchas canonizadas por la academia.

En este camino consideramos necesario retornar a la provincia de Neuquén para mencionar un acontecimiento político y social que movilizó a toda la provincia: el *Choconazo*; huelga que se produjo en plena dictadura militar de Onganía (1966-1970).

¿Cómo fue este proceso? Entre fines de 1969 y 1970 se realizó una huelga en contra de despidos de delegados y por mejores condiciones de trabajo en el contexto de la

instalación de lo que Onganía propagandizó como la “obra del siglo”: la central hidroeléctrica de El Chocón-Cerros Colorados sobre el Río Limay, a 80 km. de la capital de Neuquén. Otra llamativa forma de nombrar a la edificación de la central fue “la segunda conquista del desierto”. Allí se instaló una villa obrera que albergó a más de 3.000 trabajadores de la construcción en condiciones de hacinamiento. El 20 de noviembre de 1969 estos trabajadores realizaron una huelga en reclamo de mejores condiciones laborales. El día 13 de diciembre se vuelve a producir una huelga, pero en este caso por la detención de dirigentes obreros. En el corto documental elaborado por el Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén (2021) se explicita que los delegados de los trabajadores fueron privados de la libertad por el gobierno dictatorial de Onganía. Cabe mencionar que a fines del año 1969 habían muerto 8 obreros a causa de las malas condiciones de trabajo. Resaltamos que las huelgas tenían la característica de que eran acompañadas por las mujeres de los obreros que enfrentaron en forma directa los diferentes intentos represivos (Aiziczon, 2019). Ahora bien, el *Choconazo* no se puede comprender sin tener en cuenta la agitación social que recorrió la Argentina a finales de los años sesenta y que tuvo en el Cordobazo, en mayo de 1969, el momento culmen (Bonifacio, Mases y Taranda, 2003).

611

Un cuarto de siglo después, en 1985, la misma empresa que supervisó la obra de El Chocón (Hidrovisa), emprendería la construcción de otra central hidroeléctrica de mayor envergadura en la localidad de Piedra del Águila; en esta ocasión a 250 km de la capital neuquina. Los conflictos se reeditarían básicamente por las mismas causas: míseras condiciones de trabajo y salarios de pobreza. En este caso las luchas tendrían como carácter distintivo la fuerte organización asamblearia con la participación de fracciones sociales que no eran asalariadas de la empresa (los protagonistas comentan que en las asambleas participaba hasta el intendente y el cura párroco del pueblo junto a miles de obreros de la construcción de la central)¹⁰. La participación del partido de izquierda MAS (Movimiento al Socialismo) en la

¹⁰ Gran parte de los hechos quedaron registrados de manera sumamente clara en el documental “En obra” (Finvarb y Borenstein, 2013).

organización de los obreros, fue clave para comprender la radicalidad del proceso de lucha. La agrupación sindical de este partido ganó las elecciones de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción Argentina) Neuquén y ante la falta de reconocimiento de la UOCRA nacional realizaron una ocupación autónoma del sindicato. En este contexto de agitación política los obreros declararon la huelga y realizaron una caminata desde Piedra del Águila a la capital provincial como forma de protesta. Esta caminata de más de 250 km. fue tomada por la mayoría de la población de Neuquén como una manifestación en defensa de la dignidad de los trabajadores (Chávez, 2008; Aiziczon, 2019).

Al analizar los dispositivos de normalización que intervinieron en estas luchas, lo que observamos es que estos emergen en una etapa de ascenso de la lucha social en una provincia marcada por el entrecruzamiento de viejos y nuevos sujetos con nuevas y viejas prácticas y acciones de reclamo contra las políticas de ajuste y de exclusión en una economía de enclave (Favaro, 2000)¹¹. En el llamado *Choconazo*, la normalización ya estaba instalada a partir de una serie de dispositivos de disciplinamiento social durante el gobierno militar de Onganía.

612

Por otra parte, tanto en los conflictos del año 1969-1970 como en los de 1986 se registra como método la alianza del gobierno con el sector oficial de la dirigencia sindical. La dirigencia sindical de la UOCRA, tanto en 1969 como en 1986, deslegitimaba las medidas de fuerza de los obreros y llamaba a reponer los canales normales de la negociación.¹²

Pero ¿por qué tomamos aquí estos hechos de Neuquén? Consideramos que dichas manifestaciones se prolongaron materialmente en la década de los noventa, tanto por la población que va a quedar desocupada con la finalización de estas grandes

¹¹ La tesis de Favaro (2000) es que la sociedad neuquina es producto del orden estatal. Neuquén multiplica 27 veces su población entre 1895 y 1991 - mientras que el país lo hizo 8 veces. El impacto de la acción estatal a partir de las obras hidroeléctricas y la presencia de empresas nacionales (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Hidronor, Gas del Estado), provocan fuertes modificaciones poblacionales por la migración interna y de países limítrofes.

¹² En 1969 la conducción del sindicato de la UOCRA exigió los despidos de los delegados comprometidos con la causa obrera y en 1986 desconocen la legitimidad del dirigente Alcides Christiansen quien fue electo secretario general de la UOCRA (Chávez, 2008; Aiziczon, 2019)

obras hidroeléctricas como para la experiencia de lucha acumulada. En esta senda, Oviedo (2000) nos da una sugerencia al respecto, este autor señala que Neuquén fue la cuna del movimiento piquetero, pero no sólo por las luchas de los noventa; sino también por estos enfrentamientos realizados en los setenta y ochenta, y que aquí tomamos como claros eslabones de los Cutralcazos de 1996 y 1997.

Cabe mencionar que en la provincia de Salta también encontramos experiencias de lucha desde la década de los sesenta. En la provincia de Salta, pero en particular en las zonas petroleras se produjeron una serie de protestas protagonizadas por trabajadores ferroviarios contra el Plan Larkin, impulsado por Frondizi hacia 1961. Las manifestaciones de protesta contra el mencionado plan alcanzaron su punto más alto a partir de fines de octubre de 1961, cuando se declaró la huelga general ferroviaria por tiempo indeterminado en un contexto de fuerte movilización de las bases. Esta huelga contó con el apoyo de los obreros de YPF que se movilizaron en toda la zona de producción petrolera (Benclowicz, 2017). Paulizzi (2019) también aborda las continuidades y discontinuidades de las prácticas de protesta en Salta. En este sentido alude a prácticas de resistencia en torno a las primeras tentativas de privatización entre 1983 y 1991.

613

3. Eslabones intermedios

Lo que consideramos ahora son eslabones intermedios entre estos acontecimientos y las “clásicas” protestas de los noventa. En este sentido, los cortes de ruta y puebladas como las de la localidad de Senillosa (Neuquén), en 1994, son parte de encadenamiento de luchas que recuperamos aquí como experiencias que prolongan las tradiciones de lucha de los años sesenta, setenta y ochenta¹³.

¹³ Lo que se conoce como la pueblada de Senillosa tomando la categorización de Iñigo Carrera fue un corte de ruta con manifestaciones callejeras. Esta localidad se encuentra a pocos kilómetros de la capital de Neuquén y para el año 1994 tenía una población de 6000 habitantes de los cuales 2500 estaban desocupados. Este pueblo cuyos obreros estaban desocupados tomó la ruta 22 luego de que en una asamblea realizada el 14 de noviembre se decidiera ir a las rutas luego de que el municipio dejara de abonar los salarios profundizando aún más la crisis social. Luego del primer día de corte y ante las amenazas de represión. Al día siguiente la protesta asume la forma de una huelga general de la localidad, saliendo a la ruta también los docentes, judiciales, junto a los municipales y desocupados (Aiziczon, 2007).

Otro de los eslabones intermedios de lucha se dio a fines de septiembre de 1995, cuando se tomó la Casa de Gobierno de Neuquén, un hecho que marcó el entramado inmediatamente previo a los Cutralcazos¹⁴.

En este caso, la metodología de acción se profundizó. Ya no se trataba de la toma de una empresa o de un municipio, sino la ocupación de la Casa de Gobierno de la provincia por una Coordinadora de Desocupados que en su mayoría eran obreros de la construcción desocupados. La toma terminó con la represión policial y con ataques de los manifestantes a la sede gubernamental. A los días de estos hechos, fueron detenidos dirigentes de la Coordinadora de Desocupados como Horacio Panario y el dirigente de la UOCRA Alcides Christiansen.

Jorge Sobisch; quien fuera tres veces Gobernador de la provincia de Neuquén (1991-1995, 1999-2003 y 2003-2007) realizó una fuerte estigmatización de la coordinadora de desocupados. Este funcionario habló de “grupos con intereses oscuros que deben ser combatidos” y culpó a los grupos de izquierda por la refriega ocurrida al mismo tiempo que omitió hablar de la represión policial que ocurrió dentro de la Casa de Gobierno (Río Negro 3/10/1995).

614

El dispositivo de normalización que cobró fuerza una vez terminada la represión realizada hacia los manifestantes fue la persecución legal que finalizó con la detención de un grupo de dirigentes, entre ellos Horacio Panario, Esteban Etchebaster (era candidato a gobernador por el MST, Jorge Chiguay y Alcides Christiansen (Candidato a gobernador por el Frente de Izquierda).

Estos procesos que caracterizamos aquí como parte de un dispositivo de normalización de los sujetos es analizado por algunos autores como criminalización de la protesta social. Entienden que la consolidación de un modelo de exclusión social en los años noventa implicó estrategias de contención de la pobreza con la

¹⁴ La toma se realiza por 500 desocupados, las consignas decían “queremos trabajo”, y exigían además el pago inmediato del subsidio de los 200 pesos que habían cobrado tiempo atrás por primera vez. Cabe destacar el plan que presentan el dirigente Horacio Panario de reactivación de obras en manos del estado sin la contratación de empresas constructoras, de este modo se podrían construir 1.000 viviendas en lugar de 100 y se lograría dar trabajo a los desocupados (Finvarb y Borenstein, 2013).

distribución –cada vez más masiva– de planes sociales y asistencia alimentaria, pero, por otra parte, se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de los conflictos sociales, a través de la represión y la criminalización de los grupos sociales más movilizados. La criminalización no solo contempló la acción penal sino a la vez diversas estigmatizaciones políticas, morales e ideológicas sobre las acciones de protesta como el corte de ruta y sobre los trabajadores desocupados que las llevaron a cabo (Artese, 2009a). Pero el gobierno logro por medio de estos dispositivos una estabilidad precaria y transitoria, prontamente se van a producir nuevas protestas en la provincia de Neuquén: los Cutralcazos¹⁵.

4. Tartagal y Mosconi

Las puebladas de Tartagal y Mosconi sucedieron al poco tiempo del segundo Cutralcazo y expresan una clara continuidad de estas luchas sociales. Los protagonistas de estas protestas también son ex obreros de YPF desocupados.

El 22 de abril de 1997, los trabajadores petroleros de Tartagal y Mosconi llevaron adelante su propia rebelión popular, el llamado *Tartagalazo*. Entre el 7 y el 14 de mayo de 1997 se produjo un corte en la ruta Nacional N°34, que une Argentina con Bolivia. Podemos reconocer en esta experiencia mayor radicalidad de las medidas de lucha, sobre todo a partir del peso que adquieren las asambleas como ámbito de

615

¹⁵ El primer Cutralcazo se produce en junio de 1996, cuando los desocupados deciden cortar la ruta ante la noticia de que una empresa de fertilizantes de origen canadiense finalmente no se iba a instalar, con ello se diluyen las esperanzas de trabajo que se habían generado. La vida de las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul giró en torno al piquete (por primera vez se nombra como piqueteros o fogneros a las personas que cortan la ruta). En un primer momento el gobierno provincial del caudillo Felipe Sapag busca reprimir; mandan más de 400 gendarmes y a la policía provincial. Pero la jueza que está al frente del operativo ve la magnitud de la movilización y decide que no puede reprimir a todo un pueblo movilizado. Finalmente, el gobernador Sapag debe asistir al corte y negociar con los manifestantes. Diferentes estudios sociales toman a esta primera pueblada como la inauguración de los cortes de ruta como metodología y del movimiento piquetero (Klachko, 1999). El segundo Cutralcazo se produce en los primeros días de abril de 1997, en medio de una huelga docente motorizada por (Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén) contra la aplicación de la Ley Federal de Educación (que suponía ajuste para los docentes). El corte de ruta en Cutral Co surge en este contexto de huelga docente pero rápidamente deriva en una pueblada donde los reclamos centrales son el cumplimiento efectivo de lo acordado en el primer Cutralcazo. En este segundo Cutralcazo la pueblada que repliega a las fuerzas policiales se da a partir del asesinato de Teresa Rodríguez (Quiñonez, 2012).

discusión y toma de decisiones. Esta fuerza asamblearia permitió la autodefensa repeliendo intentos de represión (Quiñonez, 2012, p. 4).

La consideración de que hubo una profundización de la lucha en Salta respecto a las puebladas de Neuquén es compartida por Oviedo (2000): “en mayo de 1997, cuando todavía no se apagaban los ecos del segundo Cutralcazo, estalló la pueblada de Tartagal, que en muchos aspectos todavía fue más profunda que la de Neuquén” (p.75). Oviedo menciona el mayor número de obreros desocupados, a lo que se agrega el carácter histórico de la postergación de las reivindicaciones indígenas. De igual modo destaca la presencia de militantes que habían realizado acciones contra la privatización de YPF en el año 1991. La identidad de trabajadores de YPF era muy fuerte, a tal punto que sentían parte de una comunidad o familia ypefiana que no aceptaban que se pierda (Paulizzi, 2019). Este es un dato relevante, puesto que, en Neuquén, no se dio una lucha abierta contra la privatización de YPF como en el caso de Salta. De todas maneras, no podemos dejar de tener en cuenta, la contigüidad de la lucha de Salta respecto a los Cutralcazos en Neuquén, ya que, por ejemplo, una de las primeras movilizaciones realizadas por la comisión de desocupados de Salta, el 1 de mayo de 1997, fue en repudio del asesinato de Teresa Rodríguez (Oviedo, 2000).

616

Al observar los hechos, vemos que la represión fue una forma de regulación que no dio los resultados esperados, ni para el gobierno nacional, ni el provincial. A diferencia de ello la protesta se va a controlar a partir del cumplimiento de algunas de las reivindicaciones:

El martes 13 de mayo, luego de que las autoridades provinciales se hicieran presentes en la zona, los empresarios y comerciantes lograron la satisfacción de parte de sus demandas, y se retiraron del corte. Pero la medida no se levantó: los trabajadores desocupados reforzaron sus reclamos sectoriales en torno a la obtención de trabajo estable, rechazando los ofrecimientos del gobierno de planes “Trabajar” y subsidios de desempleo; en su lugar, reclamaban “[...] la creación de 5000 puestos de trabajo de 400 pesos cada uno, con una duración de tres años, más los adicionales correspondientes a salario familiar y obra social” (El Tribuno, 12/5/1997).

Inicialmente el gobierno provincial, había ofrecido 1000 planes Trabajar y 1000 subsidios de desempleo de 220 pesos cada uno. En el acuerdo firmado se estableció el otorgamiento de 1000 fondos de desempleo de 220 pesos, por un año; 3000 planes “Trabajar”, por un año y 1000, por seis meses, de 220 pesos; y 1400 puestos permanentes en petroleras privadas. Finalmente, en un marco de constantes amenazas de represión, el día 14 y tras una sustancial mejora en la oferta del gobierno los trabajadores desocupados levantaron el corte definitivamente (Benclowicz, 2007, p.11).

Vemos, desde este enfoque, que el mecanismo de normalización fue doble. La amenaza de represión por una parte y las concesiones en términos de otorgamiento de planes sociales por otra (que fue la acción resolutive del conflicto).

La intervención del obispo de Orán también fue clave para comprender cómo se logró normalizar la situación provincial:

La iglesia católica, por su parte, cumplió un rol protagónico en la protesta a través de la mediación del obispo de Orán, Mario Cargniello, quien cuestionó a los distintos gobiernos como responsables de la pobreza, y recordó a los manifestantes la necesidad de concretar acuerdos (Rojze y Polischuk, 2015, p. 11).

617

Ahora bien, podemos ver que, si bien los sujetos de la protesta lograron concretar ciertas reivindicaciones, no se alcanzó la reivindicación principal que era recomponer la condición de obreros ocupados.

5. El motín fundacional: el Santiagueñazo

Nos remitimos ahora, a lo que algunos autores consideran como el motín fundacional de las protestas en los años noventa: el santiagueñazo. Esta protesta se produce en el marco del ajuste fiscal que recrudece la pobreza de las provincias con menor desarrollo económico durante la gestión del presidente Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999).

La hegemonía menemista en cumplimiento de la primera ola de reformas del Consenso de Washington afianzó una regresiva distribución del ingreso, lo que se tradujo en aumento de la pobreza, la desocupación y subocupación. El

endeudamiento público, la valorización financiera y la desindustrialización se verían profundizadas con la instauración del modelo de la convertibilidad. Analizadas desde la perspectiva estrecha de los intereses económicos inmediatos y diferenciales de las distintas fracciones de la burguesía, las políticas de reestructuración capitalista enmarcadas por la convertibilidad parecían favorecer a poco más que a la fracción financiera de la gran burguesía. Esta fracción se convirtió en hegemónica durante el bloque menemista en el poder (Bonnet, 2008, p. 276).

La política de ajuste fiscal que se expandió desde el estado nacional hacia los estados provinciales y municipales, produjo un enorme deterioro sobre de vida de los asalariados estatales y privados que pasaron a engrosar las filas de los desocupados o de una clase trabajadora empobrecida.

En este contexto, el 16 de diciembre de 1993, estalló el llamado Santiagueño, una movilización social protagonizada por trabajadores estatales y desocupados contra el ajuste en la provincia de Santiago del Estero que se manifestaron contra la interrupción del pago de salarios a los empleados públicos. En la protesta los manifestantes atacaron la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, el Edificio Legislativo junto a los domicilios de políticos notables. Dargoltz (1994) realizó una de las primeras crónicas detallada de estos hechos.

La estrategia de normalización del gobierno nacional frente al Santiagueño asumió dos vías que parecen opuestas pero que tuvieron por objetivo reducir la tensión social. Por una parte, el mismo discurso del Presidente Menem tildaba a la rebelión popular como un acto de sedición, y por otra parte, adelantaba el envío de fondos para abonar salarios a los estatales provinciales.

El santiagueño dejaba una enseñanza que luego se internalizaba en las prácticas de gobierno: estar atento a prevenir futuros estallidos sociales.

6. La estabilización del orden social en Chaco en 1999

Al igual que en el escenario nacional; en la segunda mitad de la década de los noventa las luchas sociales desarrolladas en el Chaco tuvieron un aumento progresivo. El Gobernador Ángel Rozas, perteneciente al Partido Radical (1995-1999 y 1999-

2003) administró la provincia en un cuadro de enorme tensión social. Esto se traduce en trabajadores despedidos de las pocas fábricas que quedaban, jornalizados y trabajadores municipales que no cobraban sus sueldos, trabajadores estatales provinciales agremiados en la Unión del Personal Civil de la Provincia-UPCP- que luchaban por aumentos salariales, al igual que los docentes. Estas luchas se combinaban con las de los desocupados y tomadores de tierra. Todas estas fracciones de clase trabajadora desarrollaron como grandes ejes reivindicativos una lucha eminentemente económica por salario, tierra y trabajo¹⁶.

En el transcurso del año 1999 se observaba un cuadro de conflictividad creciente con picos de violencia material. Particularmente en los meses de abril y mayo se van a producir enfrentamientos directos entre los manifestantes de UPCP y la fuerza policial. La lucha llevada a cabo por UPCP tenía como objetivo principal la mejora salarial de 150 pesos.

Los hechos de protesta que se reiteraron con mayor fuerza fueron llevados a cabo por el gremio UPCP, que nucleaba a diferentes reparticiones de los trabajadores estatales provinciales. UPCP llegó a aglutinar al resto de gremios estatales y conformaron la Coordinadora de Gremios Estatales, una asociación de diferentes gremios del sector público, como rentas, judiciales, legislativos, docentes entre otros. Esta Coordinadora unificó reclamos y denunció las estrategias utilizadas por el gobierno en el enfrentamiento, calificándolas de ilegales e inmorales. La unidad de la Coordinadora de Gremios estatales con otras asociaciones, como la Cámara de Comercio, desocupados y otros, pasó a constituir la denominada multisectorial, heterogénea en pertenencias, intereses y objetivos. Esta multisectorial se formó en el año 1999 y tiene un recorrido conjunto hasta el 2003.

¹⁶ Si bien en el año 2000 ocurren los hechos de protesta más violentos (las movilizaciones contra las leyes de ajuste por parte de gremios estatales en abril y mayo del 2000 devienen en batallas urbanas entre manifestantes y la policía. Lo mismo ocurre en julio con el desalojo del rancho de los desocupados donde la policía reprime con balas de plomo. En octubre del 2000 se produce un nuevo enfrentamiento campal a raíz de la aprobación de los bonos quebracho como moneda en la provincia del Chaco). Es en el lapso del año 1999 cuando se gesta este ciclo de conflictividad social y protesta ante el avance de crisis económica en el campo popular.

En el año 1999 va a destacarse, por otra parte, la emergencia del movimiento piquetero en el Chaco, que va a pasar de ser la expresión de desocupados de barrios periféricos, como por ejemplo Villa Los Lirios, Villa San Juan, Villa Prosperidad, a una organización social. En este contexto la primera organización que tomó forma es el Movimiento de Trabajadores Desocupados General San Martín. Este movimiento en un principio fue pensado y hasta designado como sindicato de desocupados, se manifestaba por medio de cortes de calle y movilizaciones callejeras.

Como ya dijimos, las protestas encabezadas por UPCP sobresalieron en el año 1999. El reclamo de este gremio por una mejora salarial de 150 pesos venía desde mediados del año 1998. Ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo Provincial, el 23 de febrero instalaron la “Carpa del Salario” frente a la Casa de Gobierno provincial. En torno al mantenimiento de esta Carpa se dieron una serie de disputas que llegaron a estar atravesadas por el uso de fuerza. El día 3 de marzo los bomberos evitaron que se prendan fuego cubiertas frente a casa de gobierno. El 11 de marzo de 1998 se produjo una movilización masiva de UPCP con columnas que partieron desde diferentes puntos de la ciudad. El jueves 18 de marzo se realizó una movilización de la Coordinadora de Gremios Estatales integrada por UPCP, ATECH (Asociación de trabajadores del Chaco), SEJCH (Judiciales) y empleados Legislativos entre otros sindicatos me parece que no es necesario. El 30 de marzo se realizó un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad cuando los dirigentes de UPCP intentaron ingresar a la Casa de Gobierno (Diario Norte 31/03/1999, p.5). Este nivel de confrontación se volvería a repetir en diferentes momentos a lo largo de todo el año 1999.

Al analizar los dispositivos de normalización empleados por el gobierno, vemos diferentes tácticas orientadas a estigmatizar y desgastar a los trabajadores que reclamaban bajo la representación de UPCP y la Coordinadora de Gremios Estatales. Así, por ejemplo, registramos que el 15 de febrero 1999 el Diario Norte mencionaba como objetivo del gobierno de Ángel Rozas “neutralizar el riesgo de un plan de lucha de UPCP” convocando al diálogo. Al mismo tiempo el Ministro de Gobierno, de ese entonces, Sergio Gelman, era el encargado de limitar las expectativas del sindicato

al señalar que la crisis económica internacional afectaba la capacidad financiera de la provincia: “solo el gremio cree que la crisis brasileña no afecta a la economía”. La táctica fue conformar junto al Sindicato UPCP una Comisión para analizar las posibilidades de un aumento salarial. Claramente la perspectiva de involucrar al Sindicato en una Comisión representa una herramienta para desactivar las protestas callejeras y los paros. En respuesta a este planteo los dirigentes sindicales van a ponderar que la Provincia había incrementado en un 48,20 % sus ingresos y atendido a todos los sectores menos a los trabajadores. A su vez, el Sindicato rechazó la conformación de una comisión mixta para estudiar la factibilidad del incremento salarial que ya fuera propuesta en el mes de diciembre de 1998. En contrapartida el Ministro de Gobierno y Justicia Gelman sostenía que la negativa del sindicato a conformar dicha comisión era la responsable de no poder mejorar su situación (Diario Norte 15/02/1999).

Entre los argumentos de UPCP para obtener 150 pesos de aumento salarial se destaca la pregunta ¿Cómo sobrevivir con 300 pesos? Por otra parte, mencionaban que el mismo “gobierno de la gente”, eslogan que utilizaba el gobernador radical, Ángel Rozas, para caracterizar a su gestión: “no atiende el reclamo de los trabajadores, pero tiene dinero para capitalizar a la empresa privada Banco del Chaco” (Diario Norte, 20/02/1999, p. 5).

Como hemos aseverado, las medidas represivas fueron parte de los mecanismos de control social de la protesta callejera. El gobierno de Ángel Rozas, por medio del Decreto N°911/99 impedía que las manifestaciones se acercaran a menos de 150 metros de la Casa de Gobierno. Dicho instrumento legal fue criticado y resistido por las organizaciones en lucha. El 20 de mayo de 1999, al ponerse en vigencia lo establecido por dicha norma, se produjo un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y la policía provincial, que según la prensa de la época dejó heridos en ambos sectores (Diario Norte, 22/05/1999). Más allá de este enfrentamiento puntual, el ejercicio coactivo del gobierno sobre las actividades sindicales fue constante, desde intimidaciones policiales, hasta la judicialización de la Carpa del Salario por “ruidos molestos”. En el mismo sentido, la prédica del Gobernador Ángel Rozas apuntaba a mostrar a su gobierno como una gestión firme y calma: “no me

dejaré presionar” afirmó luego de los episodios de violencia que sacudieron a la ciudad el 20 de mayo con los enfrentamientos entre manifestantes y la policía provincial (Diario Norte, 31/03/1999, p.5).

Tenemos entonces, que dentro de los mecanismos que desplegó el Gobierno Provincial intercalaba diferentes tácticas, desde el pedido de una “tregua”, hasta el ofrecimiento de un aumento consistente entre 20 y 30 pesos, cifra exigua comparada con los 150 pesos exigidos.

Al igual que en los otros conflictos que abordamos previamente, los manifestantes buscaron apoyo y mediación en representantes religiosos. En el caso que nos ocupa, el Movimiento de Trabajadores Desocupados General San Martín buscó la mediación con el gobierno por intermedio del Obispo de la ciudad de Resistencia, Carmelo Giaquinta (Diario Norte 22/08/1999). Desde nuestro enfoque, entendemos que estas mediaciones constituyen otra forma de ejercer control sobre las luchas. Lo llamativo del caso es que los mismos sujetos que protagonizan las protestas buscaran estas mediaciones de personificaciones religiosas.

Quizás, la principal herramienta para ejercer control sobre la protesta, se sostenía en el argumento de ahogo financiero que el Gobierno proclamaba una y otra vez. La posibilidad de que se corte la cadena salarial aparecía como el resorte principal para limitar los reclamos. La misma solicitud, por parte del gobierno provincial, para que se apruebe la toma de nuevos créditos es la expresión de esta política de acallar los reclamos sociales desde la imposibilidad financiera de otorgar aumentos. El escenario general de un país marcado por el déficit fiscal en las provincias constituyó el principal respaldo para este argumento.

Pese al escenario de conflictividad constante entre sindicatos y movimientos de desocupados, podemos apreciar el grado de normalización social en la misma

acumulación de votos lograda por el Gobierno de Rozas que en las elecciones de 1999 ganó rotundamente mostrando su hegemonía política¹⁷.

7. La estabilidad luego del quiebre hegemónico en Corrientes 1999

En los primeros meses del año 1999, se profundizaba la crisis social que terminaría con la hegemonía del régimen político conducido por Raúl Rolando Romero Feris “Tato”. El Tatismo había construido el Partido Nuevo con el que ganó las elecciones de 1997 de manera aplastante, obteniendo más del 70 % de los votos en la segunda vuelta electoral. Tato Romero Feris, constituía un líder con fuerte arraigo en las capas más pobres del proletariado correntino. Sin embargo, su hegemonía política no era tan estable como parecía, y la crisis financiera llevó a que primero, dejara de abonar el aguinaldo de diciembre de 1998 y luego el salario en el mes de abril de 1999. Ante la interrupción del pago de salarios se constituyó una fuerza social que artículo diferentes fracciones de la clase trabajadora. Trabajadores de la educación pública y privada; estatales de la administración pública, de la salud, judiciales, pequeños productores y comerciantes; formaron parte de esta fuerza social que luchó por el pago de salarios y a sectores acreedores del Estado. Destacamos que también se luchó contra el régimen político, que tenía como particularidad sostenerse en el apoyo de las capas más pobres del proletariado urbano, semirural y rural.

623

Trabajos como los de Artese (2009b), Cazorla Artieda (2002), y Klachko (2003), dan cuenta de la cronología de hechos de protesta que motorizaron la caída del régimen Tatista.

La continuidad del movimiento de lucha (donde los docentes autoconvocados sobresalían por la masividad), se prolonga incluso luego de la destitución del gobernador Braillard Pocard y del Intendente Tato Romero Feris.

¹⁷ El gobierno encabezado por Ángel Rozas (Frente de Todos) logra su reelección como gobernador con un 63.29 % frente al partido Justicialista cuyo candidato Jorge Milton Capitanich alcanza un 31,21 %.

En este marco, el corte por parte de los manifestantes del Puente Interprovincial General Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco, fue el momento de mayor tensión. Esta vez el reclamo ya no era dirigido hacia el gobierno provincial, sino en búsqueda del auxilio financiero del gobierno nacional.

El 28 de julio de 1999, luego de más de 30 horas de corte del Puente Interprovincial se ejecutó el primer desalojo “fallido” por parte de los Escuadrones 51 de Resistencia, 14 de Las Palmas, ambos del Chaco y 3 de Corrientes, de la Gendarmería Nacional. La mayor parte de los manifestantes eran docentes autoconvocados, que junto a sus familias tuvieron que correr para escapar del impacto de las balas de goma y los gases lacrimógenos. La represión provocó la reacción de las capas más pobres de los trabajadores de barrios cercanos, como San Benito, Arazaty y Ferré, que se solidarizaron con los manifestantes e hicieron retroceder a la Gendarmería. Así fue que más 20 mil correntinos lograron nuevamente la ocupación del Puente Interprovincial. Luego de una serie de avances y estancamientos en la regularización de los salarios atrasados, el 10 de diciembre de 1999 se volvió a tomar el Puente, que se prolongaría hasta el día 17 de diciembre, cuando se produjo una feroz represión por parte de la Gendarmería, que terminaría con los asesinatos de Francisco Escobar y Mauro Ojeda.

624

Ante la pregunta sobre que dispositivos de poder intervinieron aquí, vemos en primer lugar, la represión de las fuerzas del orden, en este caso por Gendarmería Nacional¹⁸.

La judicialización de la protesta, por parte del Gobierno nacional, también surgió como instancia de regulación. En el marco de la lucha desarrollada fue ineficiente, porque los manifestantes rechazan la intimación judicial para desalojar el puente (Klachko, 2003). El proceso de estigmatización por parte del gobierno nacional es otro de los métodos que se desplegó: el Ministro del Interior Federico Storani, acusó a grupos infiltrados de izquierda como responsables de la rebelión (Artese, 2009b).

¹⁸ El Gobierno nacional de Fernando de la Rúa (1999-2001) que representaba a la Alianza reprimió de manera brutal el corte del puente como una forma de poner límites a una movilización que amenazaba con socavar las formas tradicionales de representación política y sindical.

La habilitación de canales de diálogo constituyó por otra parte, una forma de dividir a los sectores en lucha. Es decir, intentaron cooptar a los sindicatos docentes y de judiciales, mientras que caracterizaban a los autoconvocados como sectores radicalizados. Finalmente, la rebelión se extinguió y la provincia se “normaliza” con el pago de los salarios atrasados por parte del interventor nacional, Ramón Mestre.

8. Conclusión

Los fenómenos registrados y la analítica desarrollada en el cuerpo de esta investigación dan cuenta de que las crisis de las hegemonías provinciales, en los años noventa no se explican a partir de las consecuencias directas, sino desde una coyuntura sumamente relevante.

En las diferentes crisis hegemónicas analizadas se entrecruzaron distintos factores: la paralización de grandes obras hidroeléctricas; las pésimas condiciones de trabajo de obreros de la construcción; el cierre de industrias como (YPF), las crisis salariales provinciales; con una trayectoria de enfrentamientos de clases de mediana duración. En el caso de la provincia de Neuquén se observó, con nitidez, esta trayectoria de enfrentamientos sociales. De este ángulo analítico, la aparición del denominado movimiento piquetero no constituye una novedad radical, sino la prolongación y afianzamiento de ciertas prácticas y subjetividades.

En los conflictos de Neuquén de los periodos 1969-1970 y 1985, vemos una serie de métodos que oscilaron entre la represión directa por medio de las fuerzas policiales, la instalación de amenazas, la estigmatización de dirigentes sindicales, y la intervención de dirigentes sindicales afines a los regímenes políticos hegemónicos.

En los años ochenta en la Provincia de Neuquén, es probable que el principal dispositivo haya sido la campaña de desprestigio, el hostigamiento policial, en combinación con el accionar de la “burocracia” sindical nacional que quitó legitimidad a las luchas; a la vez que no reconoce a la conducción gremial local y los vacía financieramente.

Estos mecanismos volvemos a observar en Neuquén, en el año 1995, cuando obreros desocupados tomaron la Casa de Gobierno de esa provincia, y el gobierno de Sobisch

tilda a los desocupados como violentos al mismo tiempo que daba lugar a la judicialización y a una campaña de estigmatización sobre los líderes de la Coordinadora de Desocupados. Esta estrategia de estigmatizar, reprimir y perseguir judicialmente ya había estado presente en el motín de Santiago del Estero de 1993, dónde el mismo Presidente Carlos Menem señaló la presencia de grupos subversivos.

En los hechos de rebelión que sucedieron en el primer y segundo Cutralcazo, como en las luchas piqueteras de Salta en 1997, más allá de los episodios de violencia represiva, la fuerza de la protesta llevó a que el principal mecanismo de normalización conceder algunas de las reivindicaciones exigidas.

El *Correntinazo* de 1999, con su espiral de radicalización, también fue controlado a partir de la regularización salarial y de un recambio de las representaciones políticas, por medio de la intervención de la Provincia por el gobierno nacional.

El caso, ciertamente disonante, fueron las luchas en la provincia del Chaco. El régimen político conducido por el gobernador Ángel Rozas sostuvo su hegemonía incrementando incluso su caudal de votos sin realizar mayores concesiones a la fuerza social movilizada.

Como síntesis general, interpretamos que los dispositivos de normalización buscaron prioritariamente debilitar las protestas a partir del ataque directo de los sujetos sociales que las llevaban a cabo.

Lo que en definitiva hemos observado es cómo se sostiene un orden social en momentos de alza de luchas sociales que sacuden formas de hegemonía política y social. En relación a ello, la misma intensificación de los dispositivos de normalización evidencia que el orden social no se reproduce de manera estable. La relativa normalización que se produce no anula la constante conflictividad, sólo logra reducir o reorientar las direcciones de las luchas, sus ritmos y sobre todo su radicalidad.

¿Cómo se cita este artículo?

GRACIOSI BARRIOS, M.A. (2024). Dispositivos de normalización en las inestables hegemonías provinciales de la Argentina en los años noventa. *Argumentos. Revista de crítica social*, 30, 601-633. [link]

Bibliografía

Aiziczon, F. (30 de mayo-1 de junio de 2007). *Del "paro" a la "pueblada". Cultura política y marcos para la acción colectiva: el caso de ATE Neuquén entre 1990-1995*. I Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda, Córdoba. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9573/ev.9573.pdf

Aiziczon, F. (2019). "...y crecerá la espiga con el sol proletario?": La izquierda y las huelgas en El Chocón, Neuquén, 1969-1970. *Conflicto Social*, 12(22), 70-102. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/5165/430>

Amin, S. (1976). *¿Cómo funciona el capitalismo?* Siglo XXI.

Anderson, P. (1981). *Las antinomias de Antonio Gramsci. Estado y revolución en Occidente*. Fontamara.

Artese, M. (2009a). Criminalización de la protesta en Argentina. Una construcción de lo delictivo más allá de la esfera jurídica. *América Latina Hoy*, 52, 149-169.

Artese, M. (2009b). *La construcción de representaciones sociales en torno a la protesta social y la represión institucional. Seis estudios de caso entre los años 1996 y 2002* (Tesis de Doctorado). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Auyero, J. (2004). *Sobre Vidas Beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*. Universidad Nacional de Quilmes.

Baran, P. (1959). *Economía política del crecimiento*. Fondo de Cultura Económica.

Basualdo, E. (2006). La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas de la sustitución de importaciones a la valorización financiera. En

E. Basualdo y E. Arceo (Comps.), *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. CLACSO.

Barbeito, N. (9-11 de marzo de 2016). *Primer conflicto obrero en la transición a la democracia argentina Actores sociales y partidos políticos en el escenario neuquino en los tempranos ochenta*. XIII Seminario Argentino Chileno – VI Seminario Cono Sur De Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales. Independencias y dictaduras en el Cono Sur.
<http://rdi.uncoma.edu.ar/bitstream/handle/uncomaid/17498/barbeito-.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Benclowicz, J. (2007). *Del conflicto a la protesta, de la protesta al conflicto. Tartagal-Mosconi y la conformación del movimiento de trabajadores desocupados*. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Benclowicz, J. (2011). Repensando los orígenes del movimiento piquetero. Miseria y experiencias de lucha antes de las contrarreformas de la década de 1990 en el norte argentino. *Latin American Research Review*, 46(2), 79- 103.

Benclowicz, J. (2017). Notas sobre las experiencias de lucha obrera hacia la década de 1960 en el norte de Salta y su influencia sobre las protestas recientes. *Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad*, 28(49).

Bidaseca K. (2004). *Vivir bajo dos pieles... En torno a la resignificación de las políticas sociales y las complejidades del vínculo con el estado. El Movimiento de Trabajadores de Solano* (Informe final). CLASPO, IDES.

Bonifacio, J., Mases, E. y Taranda, D. (2003). Procesos de constitución de los movimientos piqueteros en la Provincia del Neuquén. *Estudios Sociales*, 13(25), 169-187.

Bonnet, A. (2002). Que se vayan todos. Crisis, insurrección y caída de la convertibilidad. *Cuadernos del Sur*, 18(33).

Bonnet, A. (2008). *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Prometeo.

Bonnet, A. y Piva, A. (2013). Un análisis de los cambios en la forma de estado en la posconvertibilidad. En J. Grigera, (Comp.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*. Imago Mundi.

Carzola Artieda, D. (2002). El Correntinazo. *Rebelión*.
<https://www.rebelion.org/docs/121969.pdf>

Castellani, A. y Schorr, M. (2004). Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico. *Cuaderno del Cendes*, 21(57), 55-81.

Castillo, C. (2007). *Las Luchas obreras bajo el gobierno de Kirchner*. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Cotarelo, C. (28-31 de octubre de 2009). *Conflicto social en Argentina entre 2002 y 2008*. XII Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia. San Carlos de Bariloche, Universidad Nacional del Comahue.

Chávez, B. (6-8 de noviembre de 2008). *Piedra del Águila. Obreros y conflicto en la historia reciente neuquina*. III Jornadas de Historia de la Patagonia, San Carlos de Bariloche.

http://www.hechohistorico.com.ar/Trabajos/Jornadas_de_Bariloche_2008/Ch%C3%A1vez.pdf

Dargoltz, R. (1994). *El Santiagueñazo. Crónica y gestación de una pueblada argentina*. El Despertador.

Delamata, G. (2004). *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*. Eudeba.

Dobb, M. (1969). *Capitalismo, crecimiento económico y subdesarrollo*. Oikos

Favaro, O. (2000). *Neuquén. La sociedad y el conflicto. ¿Viejos actores y nuevas prácticas sociales?* CEHEPYC.

Ferraudi Curto, M. C. (2007). Cuando vamos de piqueteros. Una aproximación crítica al concepto de identidad. En L. Rubinich, *La sociología ahora*. Siglo Veintiuno.

Finvarb, A. y Borenstein, D. (Directores). (2013). *En obra* [Documental]. INCAA.

Foucault, M. (1985). *Saber y verdad*. La piqueta.

Foucault (2002). *Vigilar y Castigar*. Siglo Veintiuno.

Foucault, M. (2008). *Historia de la sexualidad. Tomo I*. Siglo Veintiuno.

Foucault, M. (2010). *Nacimiento de la biopolítica*. Fondo de Cultura Económica.

Gamallo, L. (2014). Usando a Gramsci: El debate acerca de la hegemonía kirchnerista. *Sudamérica*, (3), 173-195.

Gramsci, A. (1980). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el estado moderno*. Nueva Visión.

Iñigo Carrera, J. (2002). Estancamiento, crisis y deuda externa: Evidencias de la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina. *Ciclos en la historia, la economía y la sociedad*, 12(23), 3-38.

Iñigo Carrera, N. (2014). El concepto de clase social y su aplicación a la situación argentina. *Theomai*, (29), 77-99.

Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2000). *La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización*. PIMSA.

Klachko, P. (1999). *Cutral Co y Plaza Huincul. El primer corte de ruta*. PIMSA.

Klachko, P. (2003). *El proceso de lucha social en Corrientes, marzo a diciembre de 1999. Los "Autoconvocados"*. PIMSA.

Masseti, A. (2004). *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva*. Editorial de las Ciencias, FLACSO.

Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática Argentina, 1983-2003*. Gorla.

Ministerio de Ciudadanía de Neuquén, Subsecretaría de Derechos Humanos. [Derechos Humanos Neuquén]. (16 de marzo de 2021). *Choconazo - Corto Documental (51 años)*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-XE-E-zHoDo>.

Murillo, S. (2015). *Neoliberalismo y gobierno de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en Argentina y Latinoamérica*. Biblos.

Oviedo, L. (2000). *Una historia del movimiento piquetero. De las primeras coordinadoras al Argentinazo*. Rumbos.

Paulizzi, M. C. (2019). *Entre gobernados y gobernantes. Los programas de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres-desocupadas y las prácticas de resistencia y autogobierno en Salta, Argentina. El caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi* (Tesis Doctorado). Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca.

Quiñonez, A. (5-7 de diciembre de 2012). *Las puebladas de la década de 1990. Conflicto, actores y agencia*. VII Jornadas de Sociología de la UNLP. Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.

Quirós, J. (2006). *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Antropofagia.

Retamozo, M. (2006). *El movimiento de trabajadores desocupados en Argentina. Subjetividad y acción en la disputa por el orden social* (Tesis de Doctorado). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Rojze, P. y Polischuk, S. (13- 17 de julio de 2015). *El corte de ruta de mayo de 1997 en Mosconi y Tartagal. Un análisis de las formas de la organización de los trabajadores desocupados*. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Ruiz Sanjuan, C. (2016). Estado, sociedad civil y hegemonía en el pensamiento político de Gramsci. *Revista de Filosofía y Teoría Política*, (47).
<https://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/article/view/RfYTPe002/html>

Schorr, M. (2001). *¿Atrapados sin salida? La crisis de la convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico*. CLACSO.

Schuster, F., Naishtat, F., Nardacchione, G. y Pereyra, S. (Comps.). (2005). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Prometeo.

Spaltemberg, R. y Maceira, V. (2001). Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en Argentina. *OSAL. Observatorio Social de América Latina*, (5), 23-28.

Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Biblos.

Sweezy, P. (1973a). *Sobre la teoría del capitalismo monopolista, en El capitalismo moderno y otros ensayos*. Nuestro Tiempo.

Sweezy, P. (1973b). *Teoría del desarrollo capitalista*. Fondo de Cultura Económica.

Vommaro, P. (2004). *La producción y las subjetividades en los movimientos sociales de la Argentina contemporánea: el MTD de Solano*. Clacso.

Artículos Periodísticos

Diario Rio Negro. (3 de octubre de 1995). Feroz ataque de desocupados, p. 6.

Diario Norte. Protesta de UPCP con rotura de vidrios en la Casa de Gobierno. 31/03/1999, p. 5.

Diario Norte. UPCP se moviliza mañana y el gobierno le propondrá hoy volver al diálogo. 15/02/1999, p. 4.

Diario Norte. UPCP se niega a formar comisión y anuncia más medidas de fuerza. 20/02/1999, p. 5.

Diario Norte. *Pacífica reinstalación de la carpa de UPCP.* 22/05/1999, p. 6.

Diario Norte. *Desocupados se reunieron con Giaquinta para pedirle que medie ante el gobierno.* 22/08/1999, p. 4.

Diario El Tribuno. *La protesta nos sobrepasó.* 12/05/1997, p. 9.